Señores

**JUZGADO CUARTO (04º) CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN**

[j04ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j04ccpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**PROCESO:** DECLARATIVO

**DEMANDANTE:** OMAR POAMANGA Y OTROS

**DEMANDADOS:** CARTÓN DE COLOMBIA Y OTROS

**RADICADO:** 19001-3103-004-**2023-00110**-00

**ASUNTO: CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado especial de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,** identificada con NIT 890903407-9, con domicilio en la ciudad de Medellín, representada legalmente por Carlos Francisco Soler Peña, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.154.041 y con dirección electrónica [notificacionesjudiciales@suramericana.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co) ,tal como se encuentra acreditado dentro del expediente. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** interpuesta por los señores Omar Poamanga Velasco y otros en contra Hugo Hernando Velasco Olave y otros; en acto seguido me permito **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por la sociedad Cartón de Colombia S.A. en contra de mi representada; anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda y del llamamiento, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

## CAPÍTULO I

## CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**Frente al hecho “2.1”:** A mi prohijada no le consta de manera directa, por cuanto aquella no tuvo injerencia ni participación en los hechos que se deprecan. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el IPAT adosado al plenario se evidencia que, en efecto, el 27 de noviembre de 2019 habría ocurrido un accidente cuya ***hipótesis planteada en el IPAT fue atribuida a la víctima directa***. En igual sentido debe indicarse que conforme a lo consignado en el RAT que aporta el apoderado de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en su contestación, el accidente obedeció a la conducta del conductor Nro. 2, esto es, de la señora Fabiola, por no encontrarse atenta a los elementos presentes en la vía y no hacer uso eficiente del carril, en una probable maniobra de adelantamiento.

**Frente al hecho “2.2”:** A mi prohijada no le consta de manera directa, por cuanto aquella no tuvo injerencia ni participación en los hechos deprecados por el extremo actor. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el IPAT adosado al plenario se evidencia que, en efecto, el 27 de noviembre de 2019 habría ocurrido un accidente a la altura de la calle 5 Nro. 50-175, barrio los jazmines de la ciudad de Popayán, donde estuvieron involucrados los vehículos de placas TZP161 y ZHX83E y, la hipótesis planteada en el IPAT fue atribuida a la víctima directa. En igual sentido debe indicarse que conforme a lo consignado en el RAT que aporta CARTÓN DE COLOMBIA S.A. en su contestación, el accidente obedeció a la conducta del conductor Nro. 2, esto es, de la señora Fabiola, por no encontrarse atenta a los elementos presentes en la vía y no hacer uso eficiente del carril, en una probable maniobra de adelantamiento. Tal circunstancia permitió concluir que fue la ***señora Fabiola quien se expuso a la creación de su propio riesgo*** ante el incumplimiento de sus deberes viales.

**Frente al hecho “2.3”:** En este hecho se hace referencia a diferentes situaciones, sobre las cuales me permito pronunciarme así:

* Es cierto que con ocasión al accidente de tránsito descrito en hechos anteriores se elaboró el Informe Policial de Accidente de Tránsito Nro. A001044240 obrante en el expediente.
* Sin perjuicio de lo anterior, se observa que, en dicho informe y una vez analizadas las condiciones de tiempo, modo y lugar por parte del agente de tránsito, se consignó como hipótesis del accidente para el vehículo 02, es decir, para la motocicleta de placas ZHX83E, los códigos 102 y 139, que corresponden a “adelantar por la derecha e impericia en el manejo”, siendo necesario manifestar desde ya, que le asistió razón al agente de tránsito en su valoración, en tanto es posible observar del material probatorio obrante en el expediente que la señora Fabiola (Q.E.P.D.), sí adelantó por la derecha, de conformidad con la posición final de su vehículo y la distancia que se observa de este respecto a la acera u orilla. Así mismo, según se observa en el expediente, es cierto que existió impericia en el manejo por parte de la señora Fabiola, del vehículo de placas ZHX83E, en tanto ***realizó una maniobra que además de prohibida*** ponía en riesgo su integridad física, aunado al hecho de ***no contar con licencia de conducción*** lo que permite concluir que la señora Fabiola no se encontraba instruida para la conducción de vehículos, siendo esta una actividad peligrosa.
* Respecto a la posición final de los vehículos, debe indicarse que conforme a lo consignado en el RAT aportado por la codemandada CARTÓN DE COLOMBIA S.A.S., el vehículo de la señora Fabiola (vehículo Nro. 2), se encontraba entre carriles, (central e izquierdo), ***además transitaba por la derecha del carril, invadiendo el espacio de tránsito del otro vehículo***, mientras que el vehículo Nro. 1, esto es, aquel que conducía el señor HUGO HERNANDO VELASCO OLAVE, transitaba sobre su respectivo espacio de tránsito. Es entonces con ocasión al adelantamiento que realiza la señora Fabiola sobre el costado derecho del carril, que se genera la interacción entre ambos vehículos y posteriormente el volcamiento del vehículo Nro. 2 conducido por la señora Fabiola.

**Frente al hecho denominado “2.4”:** A mi prohijada no le consta de manera directa lo que se indica respecto a la supuesta relación laboral. Pese a que se allegó una certificación***, la misma no podrá tener el valor probatorio pretendido hasta que se ratifique su contenido por quién la emitió***, de acuerdo a los previsto en el artículo 262 del CGP. Además, no se aporta ningún otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse el pago de las sumas de dinero aquí consignadas, tales como certificaciones contables, desprendibles de pago, entre otros.

**Frente al hecho denominado “2.5”:** Frente a las afirmaciones aquí realizadas me pronunciaré en los siguientes términos:

* A mi prohijada no le consta de manera directa la relación de consanguinidad entre la señora Fabiola (QEPD) y los aquí demandantes Natalia Poamanga Velasco, Chris Tatiana Yasnó Velasco, Carolina Poamanga Velasco, Omar Francisco Poamanga Velasco y con su hermana Tulia Cristina Malo Trujillo, por ser una situación ajena a la órbita de actuación en su rol de aseguradora, razón por la cual la afirmación deberá ser probada conforme lo ordena el artículo 167 del Código General del Proceso
* En igual sentido debo indicar que a mi prohijada no le consta de forma directa que el señor Omar Poamanga fuera el compañero permanente de la señora Fabiola (QEPD), por ser una situación ajena a la órbita de actuación en su rol de aseguradora, razón por la cual la afirmación deberá ser probada conforme lo ordena el artículo 167 del Código General del Proceso

**Frente al hecho denominado “2.6”:** No es un hecho, se trata de una afirmación subjetiva que realiza la parte demandante y que se ve materializada en las pretensiones de la demanda. Por lo que, es deber de la parte actora, conforme lo indica el Art. 167 C.G.P., probar las afirmaciones aludidas en este hecho.

**Frente al hecho denominado “2.7”:** Frente a las afirmaciones aquí realizadas me pronunciaré en los siguientes términos:

* No le asiste razón al demandante al indicar que los hechos aquí ocurridos comportan un siniestro en sí mimo, comoquiera que el ***extremo activo no acreditó bajo ningún medio probatorio la materialización del riesgo asegurado, en los términos del Art. 1077 del C. Co.*** Contrario a ello se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima directa, lo cual se probó con el IPAT y el RAT elaborado por IRSL VIAL, allegados oportunamente al expediente, en tanto en el primero documento se consigna de forma acertada como hipótesis del accidente, la impericia de la señora Fabiola como conductora del vehículo Nro. 2. y el adelantamiento por el costado derecho del carril derecho, circunstancia que es confirmada en el RAT, en tanto pudo apreciarse que la señora Fabiola fue la causante del accidente al realizar una maniobra para adelantar por el costado derecho al vehículo Nro. 1 y que fue posible concluir en atención a la posición final de dicho vehículo, que se encontraba situado entre carriles, es decir, sin respetar las distancias mínimas entre vehículos.
* A mi prohijada no le consta de manera directa la participación del referido vehículo en los hechos del 27 de noviembre de 2019, sin embargo, de conformidad con el IPAT adosado, se observa que es cierto.

**Frente al hecho denominado “2.8”:** De la redacción sintáctica de este hecho se derivan varias apreciaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

* No le asiste razón al demandante al indicar que los hechos aquí ocurridos comportan un siniestro en sí mimos, comoquiera que el extremo activo no acreditó bajo ningún medio probatorio la materialización del riesgo asegurado en los términos del Art. 1077 del C. Co. Contrario a ello se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima directa, lo cual se probó con el IPAT y RAT elaborado por IRSL VIAL, allegados oportunamente al expediente.
* ⁠Aunque no se desconoce la existencia de la póliza a la que hace referencia el extremo actor, la cual corresponde a la póliza No. 040005642907 cuya vigencia se estableció desde el 01 de diciembre de 2018 al 01 de diciembre de 2019, debe indicarse que la celebración de un contrato de seguro no significa *per sé*, la obligatoriedad a cargo de la aseguradora de indemnizar los perjuicios solicitados, comoquiera que dicha obligación sólo nace si se comprueba que se realizó el riesgo asegurado, mismo que se encuentra sujeto a las distintas condiciones de la póliza, siempre y cuando no se configure ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, ya sea de origen convencional o legal. Todo sin perder de vista que la obligación del asegurador, por ser condicional, no es exigible mientras no se compruebe la realización de la condición suspensiva convenida, que, tratándose del amparo de responsabilidad, es precisamente el nacimiento de la responsabilidad civil de la entidad asegurada. En ese orden de ideas, como en este asunto no se probó la responsabilidad del tomador o asegurado en el contrato, no ha nacido a la vida jurídica ninguna obligación indemnizatoria a cargo de mi mandante.

**Frente al hecho denominado “2.9”:** De la redacción sintáctica de este hecho se derivan varias apreciaciones, frente a las cuales me pronunciaré de la siguiente manera:

* No es un hecho, se trata de una valoración subjetiva, además infundada que realiza el apoderado de la parte demandante y que se ve materializada en las pretensiones de la demanda. En este asunto es claro que no hay lugar a endilgar responsabilidad a la demandada Cartón de Colombia S.A., en tanto se encuentra acreditado que la ***causa del accidente se debió a la conducta imprudente de la víctima directa***, quien conforme a lo que se observa del IPAT y a la Reconstrucción de Accidente de Tránsito, se expuso a la creación de su propio riesgo al conducir su vehículo inobservando las normas de tránsito que le asistían como actor vial, como quiera que adelantó por la derecha y sin conservar la distancia mínima, el vehículo de placas TZP161 y así mismo, sin contar con licencia de conducción obligatoria, circunstancia que da cuenta de la impericia de la víctima.
* ⁠De otro lado se aclara que no existe solidaridad entre la sociedad demandada Cartón de Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., pues como es sabido, la solidaridad surge en primer lugar, cuando la ley lo prevé, por quien participó en los hechos y mi prohijada no participo en los que aquí nos ocupan y, en segundo lugar, cuando la convención lo establece. En el caso que nos ocupa la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes de seguro.

**Frente al hecho denominado “2.10”:** No es un hecho, se trata de una valoración subjetiva, además infundada que realiza el apoderado de la parte demandante y que se ve materializada en las pretensiones de la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, los hechos discutidos si ocurrieron en ejercicio de una actividad peligrosa que también estaba desarrollando la víctima directa, quien de acuerdo a lo contenido en el IPAT y el RAT, fue el agente que desplegó un comportamiento eficiente y determinante en la producción del accidente.

**Frente al hecho denominado “2.11”:** No es un hecho, lo aquí mencionado hace referencia a un requisito de forma, indispensable para promover la acción que aquí nos ocupa.

## OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

En ejercicio de la conducta prevista por el artículo 206 del Código General del Proceso, el suscrito procede a objetar el juramento estimatorio presentado en el libelo de demanda, indicando desde ahora que no se hará referencia a los perjuicios extrapatrimoniales pretendidos, toda vez que la disposición normativa precitada excluye la cuantificación de los daños extrapatrimoniales por estar sujetos al arbitrio judicial y a los topes indemnizatorios fijados por la jurisprudencia.

En concordancia con lo anterior, objeto el lucro cesante liquidado en la modalidad de lucro cesante consolidad y futuro debido a que no obra en el plenario prueba alguna que acredite la existencia y cuantía de dichos daños. En ese sentido, se pone de presente ante el Despacho que la certificación aportada no podrá tener el valor probatorio pretendido hasta que se ratifique su contenido por quién la emitió, de acuerdo a los previsto en el artículo 262 del CGP. Además, no se aporta ningún otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse el pago de las sumas de dinero aquí consignadas, tales como certificaciones contables, desprendibles de pago, entre otros medios de prueba que puedan de alguna manera soportar el lucro cesante consolidado y futuro solicitado. Finalmente, tampoco hay prueba de la dependencia económica respecto de todos los demandantes que invocan este perjuicio.

Ahora bien, en vista de que se solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios a cada una de las personas que conforman el extremo actor, el suscrito procederá a pronunciarse sobre las cada situación jurídica:

* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor del señor Omar Poamanga:** OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, y en ningún caso, se encuentra acreditada la relación de dependencia, de tal suerte que no hay lugar al reconocimiento de dicho valor. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mínimo para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.
* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor de la señora Natalia Poamanga Velasco**: OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, debe indicarse que no hay lugar al reconocimiento de dichos perjuicios, comoquiera que no se encuentra acreditada en el expediente, la relación de dependencia entre la señora Natalia (hija) y la señora Fabiola (QEPD). Conforme al Registro Civil de Nacimiento de la señora Natalia, se tiene que esta tenía 19 años al momento del fallecimiento de su madre, sin embargo, no se aporta certificado de estudio con el que pudiera demostrarse la obligación alimentaria que aún se encontrara a cargo de la señora Fabiola y como se indicó anteriormente, ningún elemento material probatorio del que pueda predicarse su dependencia económica, de tal suerte que no existió frustración económica para esta. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mímino para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.
* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor de la señora Chris Tatiana Yasno Velasco**: OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, debe indicarse que no hay lugar al reconocimiento de dichos perjuicios, comoquiera que no se encuentra acreditada en el expediente, la relación de dependencia entre la señora Chris (hija) y la señora Fabiola (QEPD). Conforme al Registro Civil de Nacimiento de la señora Chris, se tiene que esta tenía 29 años al momento del fallecimiento de su madre, es decir, no existía obligación alimentaria frente a esta y a cargo de la señora Fabiola y como se indicó anteriormente, no se aporta ningún elemento material probatorio del que pueda predicarse su dependencia económica, de tal suerte que no existió frustración económica para esta. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mímino para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.
* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor de la señora Carolina Poamanga Velasco:** OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, debe indicarse que no hay lugar al reconocimiento de dichos perjuicios, comoquiera que no se encuentra acreditada en el expediente, la relación de dependencia entre la señora Carolina (hija) y la señora Fabiola (QEPD). Conforme al Registro Civil de Nacimiento de la señora Carolina, se tiene que esta tenía 25 años al momento del fallecimiento de su madre, sin embargo, no se aporta certificado de estudio con el que pudiera demostrarse la obligación alimentaria que aún se encontrara a cargo de la señora Fabiola y como se indicó anteriormente, no se aporta ningún elemento material probatorio del que pueda predicarse su dependencia económica, de tal suerte que no existió frustración económica para esta. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mímino para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.
* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor del señor Omar Francisco Poamanga Velasco:** OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, debe indicarse que no hay lugar al reconocimiento de dichos perjuicios, comoquiera que no se encuentra acreditada en el expediente, la relación de dependencia entre el señor Omar (hijo) y la señora Fabiola (QEPD). Conforme al Registro Civil de Nacimiento del señor Omar, se tiene que esta tenía 21 años al momento del fallecimiento de su madre, sin embargo, no se aporta certificado de estudio con el que pudiera demostrarse la obligación alimentaria que aún se encontrara a cargo de la señora Fabiola y como se indicó anteriormente, no se aporta ningún elemento material probatorio del que pueda predicarse su dependencia económica, de tal suerte que no existió frustración económica para esta. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mímino para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.
* **Frente a la cuantificación del lucro cesante en modalidad consolidado y futuro en favor de la señora Tulia Cristina Malo Trujillo (hermana):** OBJETO EL RUBRO PRETENDIDO. Además de lo antes indicado, esto es, que no se acredita bajo ningún documento la frustración económica sobre la cual los demandantes liquidan dichos perjuicios, debe indicarse, además, que no obra en el expediente prueba de la relación de dependencia entre estas, de tal suerte que no hay lugar al reconocimiento de dicho valor. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mímino para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante, en tanto que se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre los aquí demandantes y la señora Fabiola (QEPD). De modo tal que, al no encontrarse probados los perjuicios que alega en el juramento estimatorio, es jurídicamente improcedente su reconocimiento conforme a la necesidad de prueba sobre la existencia y cuantía que exige el reconocimiento de los daños.

Por las razones antes expuestas, me opongo enfáticamente al juramento estimatorio de la demanda.

## FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la reforma de la demanda por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en la medida en que no se reúnen los supuestos esenciales para que se estructure la Responsabilidad Civil Extracontractual. De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me referiré a cada pretensión de la siguiente manera:

**Frente a la pretensión “4.1.”** Respetuosamente manifiesto al Despacho que **ME OPONGO** a que se acceda a la solicitud de declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de mi representada Seguros Generales Suramericana S.A. y así mismo de Cartón De Colombia S.A., por los supuestos perjuicios ocasionados a los demandantes en el accidente del 27 de noviembre de 2019. Lo anterior, toda vez que la causa del accidente se debió a la culpa exclusiva de la víctima, en tanto fue posible determinar de acuerdo a lo contenido en le IPAT y el RAT, que esta desplegó conductas determinantes en la producción del accidente, al inobservar las normas en materia de tránsito, exponiéndose como consecuencia de ello a la creación de su propio daño, permitiendo además concluir su impericia en el desarrollo de una actividad peligrosa. De otro lado, debe indicarse, además, que no existe solidaridad entre la sociedad demandada Cartón de Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., pues como es sabido, la solidaridad surge en primer lugar, cuando la ley lo prevé, por quien participó en los hechos y mi prohijada no participo en los que aquí nos ocupan y, en segundo lugar, cuando la convención lo establece. En el caso que nos ocupa la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes de seguro.

**Frente a la pretensión “4.2.”: ME OPONGO** a la prosperidad de cualquier condena, en tanto se encuentra acreditado el rompimiento del nexo causal con ocasión de la demostración de la culpa exclusiva de la víctima, conforme a lo señalado en el IPAT y el RAT realizado por IRS VIAL y aportado en la contestación de la demanda de CARTÓN DE COLOMBIA S.A. De tal suerte que no habría lugar a que la parte pasiva se viera obligada a proceder con el pago de la indemnización perseguida por los aquí demandantes. Ahora, concretamente me referiré frente a cada perjuicio invocado en la demanda de la siguiente manera:

* **Frente a la pretensión “4.2.1”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago de la suma solicitada por concepto de ***lucro cesante consolidado***, debido a que, para el caso concreto, la certificación aportada no podrá tener el valor probatorio pretendido hasta que se ratifique su contenido por quién la emitió, de acuerdo a los previsto en el artículo 262 del CGP. Además, no se aporta ningún otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse el pago de las sumas de dinero aquí consignadas, tales como certificaciones contables, desprendibles de pago, entre otros medios de prueba que puedan de alguna manera soportar el lucro cesante consolidado y futuro solicitado. Finalmente, tampoco hay prueba de la dependencia económica respecto de todos los demandantes que invocan este perjuicio.
* **Frente a la pretensión “4.2.1.1”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor del señor Omar Poamanga toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre el señor Omar y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.1.2”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor de la señora Natalia Poamanga toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Natalia y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.1.3”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor de la señora Chris Tatiana Yasno Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Chris y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.1.4”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor de la señora Carolina Poamanga Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Carolina y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.1.5”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor del señor Omar Francisco Poamanga Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre el señor Omar y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.1.6”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante consolidado en favor de la señora Tulia Cristina Malo Trujillo toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Tulia y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago de la suma solicitada por concepto de ***lucro cesante futuro***, debido a que, para el caso concreto, la certificación aportada no podrá tener el valor probatorio pretendido hasta que se ratifique su contenido por quién la emitió, de acuerdo a los previsto en el artículo 262 del CGP. Además, no se aporta ningún otro medio de prueba con el cual pueda acreditarse el pago de las sumas de dinero aquí consignadas, tales como certificaciones contables, desprendibles de pago, entre otros medios de prueba que puedan de alguna manera soportar el lucro cesante consolidado y futuro solicitado. Finalmente, tampoco hay prueba de la dependencia económica respecto de todos los demandantes que invocan este perjuicio
* **Frente a la pretensión “4.2.2.1”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor del señor Omar Poamanga toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre el señor Omar y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2.2”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor de la señora Natalia Poamanga toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Natalia y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2.3”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor de la señora Chris Tatiana Yasno Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Chris y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2.4”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor de la señora Carolina Poamanga Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Carolina y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2.5”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor del señor Omar Francisco Poamanga Velasco toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre el señor Omar y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.2.6”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del lucro cesante futuro en favor de la señora Tulia Cristina Malo Trujillo toda vez que no se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima, la señora Claudia Fabiola Velasco, con anterioridad al accidente y, adicionalmente, no se allegó prueba alguna que acredite la relación de dependencia económica entre la señora Tulia y la señora Fabiola (QEPD).
* **Frente a la pretensión “4.2.3”: ME OPONGO** a la condena frente a las sumas solicitadas, que se reclaman a título de ***daño moral***, porque como se ha insistido, no se han estructurado los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que en este proceso se pretende endilgar. Adicionalmente, es importante mencionar al despacho que en caso remoto y eventual de condenar a la parte pasiva de la litis, los montos pretendidos por el perjuicio extrapatrimonial supera los baremos jurisprudenciales que rigen la materia.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.1”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor del señor Omar Poamanga toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por el señor Omar e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.2”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor de la señora Natalia Poamanga toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por la señora Natalia e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.3”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor de la señora Chris Tatiana Yasno Velasco toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por la señora Chris e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.4”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor de la señora Carolina Poamanga Velasco toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por la señora Carolina e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.5”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor del señor Omar Francisco Poamanga toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por el señor Óscar e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.
* **Frente a la pretensión “4.2.3.6”: ME OPONGO** al reconocimiento y pago del daño moral en favor de la señora Tulia Cristina toda vez que en el plenario no reposa prueba que acredite la congoja sufrida por la señora Tulia e, igualmente, el rubro pretendido excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.

**Frente a la pretensión “4.3”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por ser consecuencial a las anteriores y por cuento, además, no existe solidaridad entre la sociedad demandada Cartón de Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., pues como es sabido, la solidaridad surge en primer lugar, cuando la ley lo prevé, por quien participó en los hechos y mi prohijada no participó en los que aquí nos ocupan y, en segundo lugar, cuando la convención lo establece. En el caso que nos ocupa la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes de seguro.

**Frente a la pretensión “4.4”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión en la medida que no existe responsabilidad alguna de la parte demandada. Así las cosas, es improcedente lo perseguido al no contar con evidencia suficiente que permita una eventual condena adversa a los intereses de esta pasiva. Así mismo, me permito reiterar que no existe solidaridad entre la sociedad demandada Cartón de Colombia S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A., pues como es sabido, la solidaridad surge en primer lugar, cuando la ley lo prevé, por quien participó en los hechos y mi prohijada no participo en los que aquí nos ocupan y, en segundo lugar, cuando la convención lo establece. En el caso que nos ocupa la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes de seguro.

**Frente a la pretensión “4.5”: ME OPONGO** a su prosperidad de esta pretensión debido a la nula vocación de éxito de la demanda. Por el contrario, solicito se condene en costas y agencias en derecho a la parte activa.

**Frente a la pretensión “4.6”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión en la medida que no existe responsabilidad alguna de la parte demandada. Así las cosas, es improcedente lo perseguido al no contar con evidencia suficiente que permita una eventual condena adversa a los intereses de esta pasiva.

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO

# INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CONFIGURARSE EL HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA

La demanda no está llamada a prosperar debido a que el accidente materia de litigio, ocurrió como consecuencia del hecho de la propia víctima. Así las cosas, se pone de presente ante el Despacho que en el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna al conductor de vehículo de placas TZP-161, por el presunto accidente acaecido el 27 de noviembre de 2019 producido como consecuencia la colisión entre el vehículo en mención y la motocicleta de placas ZHX-83E, en el que resultó herida la señora Claudia Fabiola Velasco Trujillo. Lo anterior, se sustenta en (i) la víctima directa desatendió el deber de cuidado en tanto adelantó por la derecha (ii) la señora Claudia Fabiola Velasco no contaba con licencia de conducción que la facultara a manejar la motocicleta y (iii) la motocicleta no contaba con la revisión tecno-mecánica exigida por la Ley. En ese sentido, en atención a que se configura la culpa exclusiva de la víctima, no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad del extremo pasivo de la litis.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la responsabilidad civil por actividades peligrosas admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño.

“(…) Cuando hablamos del hecho de la víctima, nos referimos a una causal que impide efectuar la imputación, en el sentido en que, si bien es cierto, que puede ser que el demandado causó el daño física o materialmente, el mismo no puede serle imputable en la medida en que el actuar de la víctima que le resultó extraño, imprevisible e irresistible, lo llevó a actuar de forma que causara el daño, razón por la cual el mismo es imputable desde el punto de vista jurídico a la víctima y no al demandado(…).”

[[1]](#footnote-1)

Como se evidencia en el precitado pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en reconocer que, para la configuración de esta causal eximente o atenuante de responsabilidad, basta con acreditar la irresistibilidad o imprevisibilidad del comportamiento de la víctima, misma que no podía ser evitada por quien causó materialmente el daño, es decir, que si bien el presunto responsable causó el daño la acción desplegada no fue la causa eficiente y determinante en la producción del mismo. Situación que efectivamente ocurre en el caso de marras, puesto que, la conducta imprudente de la señora Claudia Fabiola Velasco Trujillo como conductora de la motocicleta de placas ZHX-83E, confluyó significativamente en la ocurrencia del accidente. Ello en atención a que, **se puso en peligro a ella y a los demás actores viales al decidir manejar un vehículo sin ser propietaria de la licencia de conducción, sin contar con un vehículo apto para transitar de forma segura ya que este no tenía tecno mecánica y por incumplir las normas de tránsito al adelantar de forma inadecuada.**

De este modo, el comportamiento de hecho y de derecho de la víctima es determinante y autónomo en la producción de los hechos demandados. Ciertamente, es la señora Fabiola (QEPD) quien en incumplimiento de las normas de tránsito se expuso a la creación del riesgo y, en consecuencia, no existe razones de hecho ni de derecho por la cuales pueda atribuirse responsabilidad al señor Hugo Hernando Velasco Olave como conductor del vehículo de placas TZP161, quien, en todo caso, condujo el vehículo bajo el cumplimiento de las normas de tránsito, conservando su carril, contrario a las maniobras que ejecutó la señora Fabiola.

“(…) **ARTÍCULO 68. UTILIZACIÓN DE LOS CARRILES**. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:

Vía de sentido único de tránsito.

En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha.

En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.

Vías de doble sentido de tránsito.

**De dos (2) carriles:** Por el carril de su derecha **y utilizar con precaución el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento** y respetar siempre la señalización respectiva.

De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente.

De cuatro (4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos.

**ARTÍCULO 108. SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS.** La separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada, será de acuerdo con la velocidad.

**Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.**

Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.

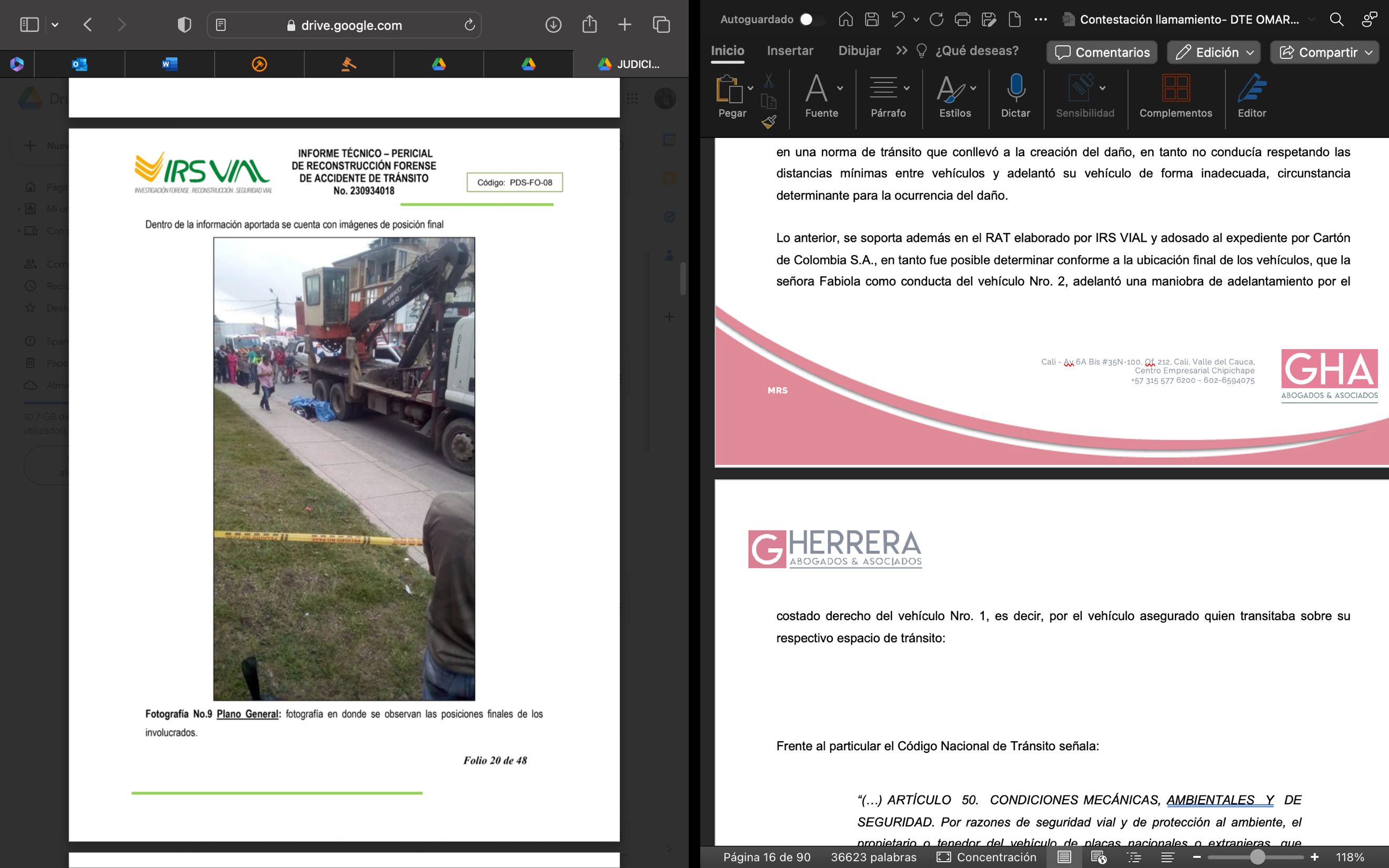
Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros.

Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad competente indique.

En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede (…)” (Subraya y negrilla fuera de texto)

De conformidad con lo señalado en la norma transcrita es posible reiterar que, la señora Fabiola incurrió en una norma de tránsito que conllevó a la creación del daño, en tanto no conducía respetando las distancias mínimas entre vehículos y adelantó su vehículo de forma inadecuada, circunstancia determinante para la ocurrencia del daño.

Lo anterior, se soporta además en el RAT elaborado por IRS VIAL y adosado al expediente por Cartón de Colombia S.A., en tanto fue posible determinar conforme a la ubicación final de los vehículos, que la señora Fabiola como conducta del vehículo Nro. 2, adelantó una maniobra de adelantamiento por el costado derecho del vehículo Nro. 1, es decir, por el vehículo asegurado quien transitaba sobre su respectivo espacio de tránsito:



De la anterior fotografía es posible observar la posición final de los vehículos y advertir que el vehículo Nro. 1 (tracto camión), como se ha indicado anteriormente, transitaba sobre su respectivo espacio de tránsito, de acuerdo a su posición, este conservaba su carril, además, conducía bajo una velocidad permitida en tanto los vehículos se encontraban casi detenidos, esperando el avance del tráfico vehicular.

En sentido contrario se observa que la motocicleta conducía entre carriles, es decir, no conservaba su posición en la vía, adelantado por la derecha del vehículo Nro. 1, maniobra que está expresamente prohibida, pero además, denota su falta de pericia en tanto resulta evidente la poca distancia que existe entre el vehículo Nro. 1 y la acera u orilla, de tal suerte que conducir en dicho espacio además de estar prohibido, representaba un peligro para la víctima y al que de forma autónoma ese expuso.

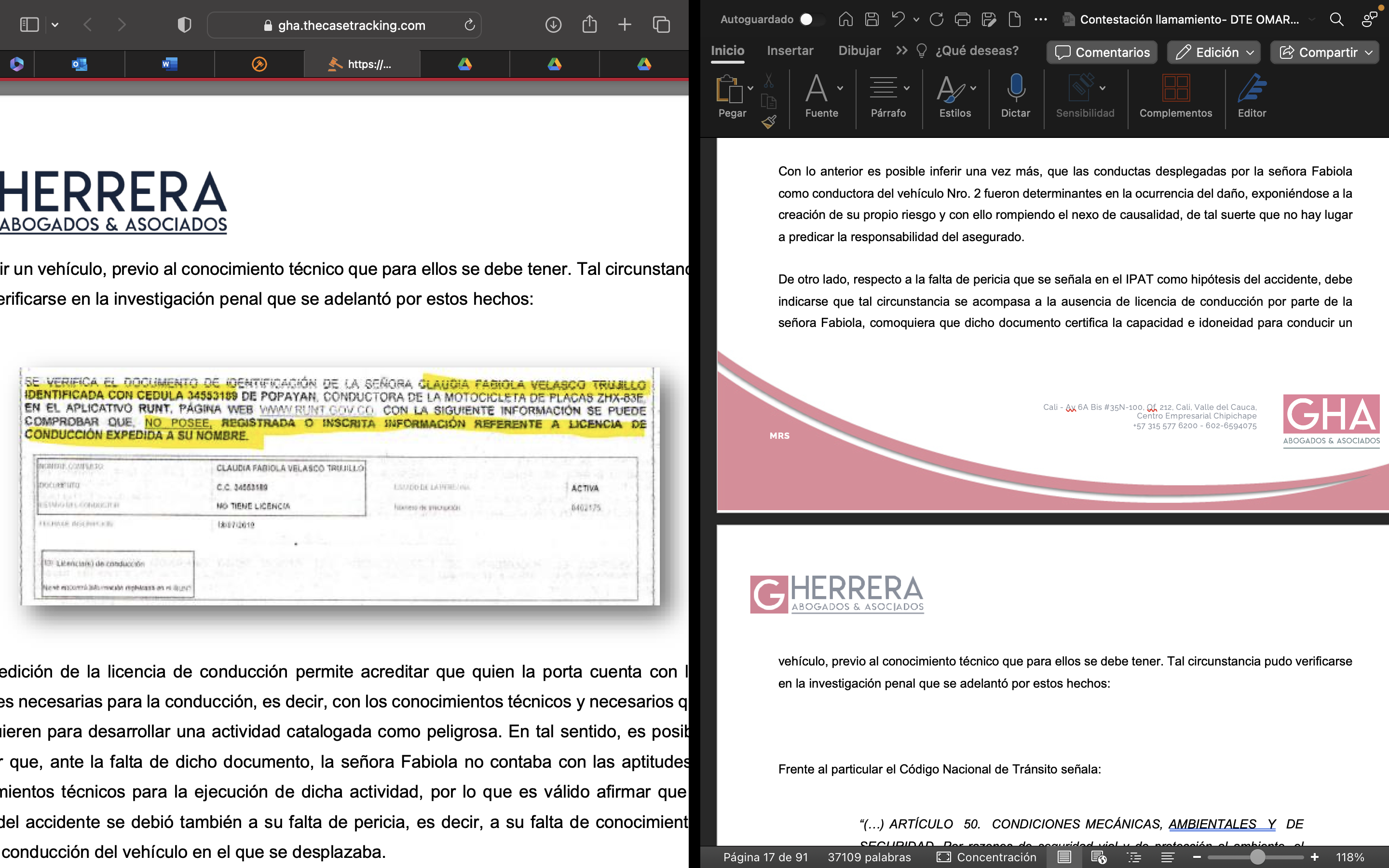


Lo anterior es una imagen representativa consignada en el RAT y en el que se observa la posición final de los vehículos y las distancia entre los mismos y la distancia entre el vehículo Nro. 2 conducido por la señora Fabiola. La misma una vez más permite confirmar la maniobra que de forma imprudente realizó la señora Fabiola, al adelantar al vehículo Nro. 1 por su derecha, pese a que, conforme a las normas de tránsito, debió estar ubicada detrás del vehículo Nro. 1, conservando su respectivo carril de tránsito y bajo la distancia que la ley dispone.

Aunado a lo anterior debe indicarse que la señora Fabiola encontraba en su campo visual al camión, es decir podía prever la distancia y la posición en la que dicho vehículo se encontraba, por lo que le asistía el deber de evitar adelantar una maniobra que diera lugar a los resultados fatales que se presentaron, distinto al campo visual del vehículo Nro. 1 (camión), quien dependía de la configuración de sus espejos retrovisores y ubicación relativa de la motocicleta.

Con lo anterior es posible inferir una vez más, que las conductas desplegadas por la señora Fabiola como conductora del vehículo Nro. 2 fueron determinantes en la ocurrencia del daño, exponiéndose a la creación de su propio riesgo y con ello rompiendo el nexo de causalidad, de tal suerte que no hay lugar a predicar la responsabilidad del asegurado.

De otro lado, respecto a la falta de pericia que se señala en el IPAT como hipótesis del accidente, debe indicarse que tal circunstancia se acompasa a la ausencia de licencia de conducción por parte de la señora Fabiola, comoquiera que dicho documento certifica la capacidad e idoneidad para conducir un vehículo, previo al conocimiento técnico que para ellos se debe tener. Tal circunstancia pudo verificarse en la investigación penal que se adelantó por estos hechos:



La expedición de la licencia de conducción permite acreditar que quien la porta cuenta con las aptitudes necesarias para la conducción, es decir, con los conocimientos técnicos y necesarios que se requieren para desarrollar una actividad catalogada como peligrosa. En tal sentido, es posible concluir que, ante la falta de dicho documento, la señora Fabiola no contaba con las aptitudes y conocimientos técnicos para la ejecución de dicha actividad, por lo que es válido afirmar que la causa del accidente se debió también a su falta de pericia, es decir, a su falta de conocimientos para la conducción del vehículo en el que se desplazaba.

Frente al particular el Código Nacional de Tránsito señala:

“(…) ARTÍCULO 50. CONDICIONES MECÁNICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD. Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, **tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas**, ambientales y de seguridad.

ARTÍCULO 51. REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS VEHÍCULOS. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, **todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.** (…)” (Subraya y negrilla fuera de texto)

Visto lo anterior, es claro que la Ley considera de vital importancia que los vehículos tengan la revisión técnico-mecánica pues ello significa una mayor protección para quien conduce el automotor y para los demás actores viales, situación que omitió flagrantemente la señora Fabiola desconociendo los mínimos de responsabilidad y cuidado que se deban tener a la hora de conducir un vehículo en una vía pública.

Por lo expuesto resulta notorio que la causa eficiente, única y definitiva del accidente recae sobre la señora Fabiola. De tal suerte, deberán negarse las pretensiones de la demanda, lo anterior toda vez que es posible observar que la señora Fabiola inobservó las normas de tránsito que le asistían como actor vial, con lo que se expuso al resultado fatal que lamentablemente acaeció. Lo anterior, de acuerdo con lo consignado en el IPAT y el dictamen pericial aportado por Cartón de Colombia S.A., en los que se constata que la causa del accidente que aquí nos ocupa estuvo en cabeza exclusiva de la víctima, sin que pueda pretender la indemnización a cargo de un tercero que no tuvo participación alguna en el resultado fatal. En ese contexto, solicito respetuosamente al despacho se sirva declarar probada esta excepción.

# REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA SEÑORA FABIOLA VELASCO TRUJILLO (Q.E.P.D.) EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

En gracia de discusión y de manera subsidiaria a la excepción de culpa exclusiva de la víctima, debe tenerse en cuenta que EN EL REMOTO E IMPROBABLE EVENTO en el que se acredite que el accidente se produjo por un actuar de los demandados, pese a que está totalmente demostrado que no fue así, de todas maneras, se deberá reducir la eventual indemnización como consecuencia de la participación de la víctima en el suceso. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente la señora Fabiola Velasco Trujillo (q.e.p.d.), ya que (i) el IPAT codifica única y exclusivamente a la señor Fabiola con la hipótesis 102 y 139, (ii) Estando el tracto camión transitando por su respectivo carril es adelantado en un maniobra prohibida por el vehículo Nro.2, conducido por la señora Fabiola y (iii) el motociclista no contaba con licencia de conducción, evidenciado su falta de habilidad y destreza para la conducción de automotores.

Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la señora Fabiola Velasco Trujillo (q.e.p.d.) en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió el causante y los demandantes, como consecuencia de las conductas imprudentes de la señora Fabiola Velasco Trujillo (q.e.p.d.). Así es como lo ha indicado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones:

“(…) Para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según el cual “‘**[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente**’. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación “compensación de culpas (…)”[[2]](#footnote-2) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40 % de los perjuicios:

“(…) En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resulta incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.

Sin embargo, **aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor**.

Debió entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades. Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, **en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40%** (…)”[[3]](#footnote-3) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño en proporción a un 40% y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje. Como quiera que la responsabilidad del Demandado resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del suceso. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima y del tercero que conducía la motocicleta, en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que la señora Fabiola Velasco Trujillo (q.e.p.d.) tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el 27 de noviembre de 2019. Deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño mínimo y a lo sumo es del 50%. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación del conductor de la motocicleta en la ocurrencia del siniestro, como mínimo en un 50%.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

# CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTE

Se propone esta excepción, sin que con ello se esté reconociendo responsabilidad a cargo de mi procurada, solo para manifestar que bajo el hipotético caso en que el Juzgado emitiera un fallo condenatorio al extremo pasivo, las sumas reclamadas por concepto de perjuicios morales deben necesariamente reajustarse para reconocer (si a ello hubiere lugar) lo que efectivamente correspondiera al extremo actor. Se tiene que la parte activa solicita una cuantiosa indemnización por unos presuntos perjuicios inmateriales y resulta pertinente poner de presente que la tasación de los mismos, sobrepasan a todas luces los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto a la tasación de los perjuicios morales resulta a todas luces improcedente y excesiva su tasación, toda vez que los demandantes pretenden una suma de dinero que desconoce los criterios que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, cuando los perjuicios morales se causan por la vulneración de los sentimientos íntimos de una persona o por la afectación en su esfera subjetiva, emocional e interna, lo cual para el caso en concreto no se encuentra acreditada, pues no hay una prueba siquiera sumaria que vislumbre al despacho que a los aquí demandantes se le causó un daño emocional tan grave que amerite el reconocimiento de este perjuicio, más aún cuando se precisa que este perjuicio no se presume, sino que debe acreditarse.

Por otro lado, el reconocimiento por perjuicios inmateriales no opera de manera automática, ante la ocurrencia de un hecho dañoso ni se presume en todos los casos, de allí que corresponda al juez, dentro de un análisis minucioso, objetivo y detallado de la situación, concluir si se acreditó o no la existencia de tal perjuicio, y acto seguido de encontrar probado, le corresponde determinar su cuantía, atendiendo a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado a favor de los demandantes.

En este punto es importante señalar que, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado: *“(…) para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador (…)”.*

Por lo tanto, es el Juez en el desarrollo de la etapa probatoria quien determinará si efectivamente hubo responsabilidad a cargo de los aquí demandados, y en caso de que este improbable suceso ocurra, atendiendo las circunstancias específicas del caso, entrará a determinar el verdadero grado de afectación de los demandantes y fijará los montos de indemnización a que haya lugar, sin que estos puedan exceder los límites fijados por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Civil, respecto de la reparación o compensación de los perjuicios inmateriales, en este caso, frente al daño moral.

Ahora bien, si en gracia de discusión resultara probada la supuesta falla en que incurrió la pasiva, las sumas reclamadas son abiertamente desproporcionadas y contrarían los parámetros que jurisprudencialmente se han dictado sobre el asunto.

Para ilustrar de forma puntual la manera en que la Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en sentencia del 22 de octubre de 2021 con radicación No. 2001-01048-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de un hombre que falleció en un accidente aéreo. En dicho caso, que resulta particularmente reciente, se reconoció la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($ 47.472.181) a la cónyuge e hijos de la persona fallecida. En otro penoso caso que resulta similar al presente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020 con proceso radicado No. 2011-00020-01 decidió reconocer la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55.000.000) a la cónyuge e hijos por concepto de daño moral por la muerte de un hombre en un accidente de tránsito.

La Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan equivocados y exorbitantes. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de fallecimiento, la Corte ha fijado como baremo indemnizatorio el tope de $60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

“(…) Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija **en la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000)** el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima (…)”[[4]](#footnote-4)(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la parte demandante. Pues, en primer lugar, solicitar $600.000.000 para los demandantes resulta exorbitante, dado que el tope indemnizatorio fijado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corresponde a $ 60.000.000 en los casos más graves y sólo a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, cuando aplica. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, lo que pretende probar la parte demandante y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte, sus peticiones son abiertamente inconducentes e injustificadas, por cuanto sus pedimentos superan el baremo jurisprudencial que sobre el daño moral ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en casos de fallecimiento de la víctima.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

# IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DEL SUPUESTO LUCRO CESANTE QUE PRETENDEN LOS DEMANDANTES

Presento esta excepción para efectos de oponerme al reconocimiento de este concepto por cuanto no se cumplen los presupuestos legales para su reconocimiento. Debe advertirse que se pretende probar la relación laboral de la señora Fabiola Velasco Trujillo (q.e.p.d.) a través de una certificación laboral, pero sin aportar ningún otro medio de prueba que permita acreditar la veracidad de lo allí contenido o de las manifestaciones que realiza la parte demandante respecto al salario devengado; además, dicho documento es de contenido privado, emanados de terceros, el cual deben ser ratificado por quien los suscribió, es decir, no hay certeza de su veracidad, pues es completamente desconocida la calidad de quien los firma. Además, el extremo activo acredita la relación de dependencia entre la señora Fabiola Velasco Trujillo y cada uno de los demandantes, contrario a ello se observa que todos sus hijos eran mayores de edad al momento del fallecimiento de su madre y aquellos menores a los 25 años no prueban su condición de estudiante y de lo cual pudiera inferirse la obligación alimentaria de la señora Fabiola para con estos. Tampoco existe si quiera prueba sumaria de la relación de dependencia que existiera entre la señora Fabiola y su hermana o entre la víctima directa y su compañero permanente. Finalmente, la liquidación que hace el apoderado es equivocada por cuanto el valor con el cual la realiza no tiene ningún soporte documental dentro del expediente, como se explicó antes.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

“(…) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual**. (…) Vale decir que **el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (…) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (…)”[[5]](#footnote-5). (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente:

“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, **a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable**, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

“(...) **resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas** o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”10 (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. Como se indicó anteriormente, bajo ningún medio probatorio el extremo activo acredita la relación de dependencia entre la señora Fabiola Velasco Trujillo y cada uno de los demandantes, contrario a ello se observa que todos sus hijos eran mayores de edad al momento del fallecimiento de su madre y aquellos menores a los 25 años no prueban su condición de estudiante y de lo cual pudiera inferirse la obligación alimentaria de la señora Fabiola para con estos. Tampoco existe si quiera prueba sumaria de la relación de dependencia que existiera entre la señora Fabiola y su hermana o entre la víctima directa y su compañero permanente, por lo tanto, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante a favor de la demandante mencionada, toda vez que no se acreditó, bajo ningún medio, la relación de dependencia económica respecto del causante.

De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

## EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

# INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 040005642907 Y NO SE HA PROBADO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, por cuanto no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por la parte Demandante, es decir no se ha estructurado la responsabilidad a cargo del asegurado o del conductor autorizado del vehículo de placas TZP-161, por el contrario si existe prueba de que el único factor determinante en la producción del accidente fue la conducta de la señora Fabiola Velasco, situación que de entrada impide tener por acreditado la realización del riesgo asegurado y adicionalmente, tampoco se acreditó la cuantía de la pérdida, en consecuencia es claro que no ha nacido obligación de indemnizar por parte de mi representada Seguros Generales Suramericana S.A.

Para los efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“***ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.***

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad*.” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“*Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)*[[6]](#footnote-6) ” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“*2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario*” (art. 1089, ib.)[[7]](#footnote-7)”.

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios*[[8]](#footnote-8)” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte Demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1077 del C. Co. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del Asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

1. La no realización del Riesgo Asegurado.

Sin perjuicio de las excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. 040005642907, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la Aseguradora cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el Asegurado nombrado en la carátula de la póliza o conductor autorizado del vehículo asegurado derivados de la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues ante la inexistencia de nexo causal entre las conductas del conductor del vehículo de placas TZP-161 y el daño reclamado por la parte Actora, no procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro. Puesto que de conforme a lo consignado en el IPAT y el RAT elaborado por el IRSL VIAL, se concluye que la conducta de señora Fabiola Velasco como conductora del vehículo Nro. 2, fue determinante en la causación del daño, es decir dicho supuesto fáctico impide que nazca la responsabilidad civil extracontractual a cargo de la pasiva, lo que de entrada supone que el riesgo asegurado no se realizó.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado y del conductor del vehículo de placas TZP-161a, la Aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado o conductor del vehículo de placas TZP-161. Sin embargo, los Demandantes no lograron estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Dicho lo anterior, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que nos encontramos ante una situación en la que no existe nexo causal para enervar la responsabilidad, pues no se ha demostrado que los perjuicios ocurrieron como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado ni del conductor autorizado por éste. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

1. Acreditación de la cuantía de la pérdida.

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna por perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, toda vez que no se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior, puesto que la parte demandante solicita el reconocimiento de lucro cesante por los dineros dejados de percibir por los aquí demandantes con ocasión a los hechos acaecidos el 27 de noviembre de 2019 sin acreditar los ingresos percibidos por la señora Fabiola Velasco antes del acontecimiento que dio origen a la presente demanda, así como tampoco se acreditó la dependencia económica de los demandantes necesaria para el reconocimiento de esta tipología de daño.

Adicionalmente, el extremo actor pretende el reconocimiento y pago del daño moral en favor de cada uno de los demandantes sin allegar prueba alguna que acredite la afectación sufrida a causa de los hechos acaecidos el 27 de noviembre de 2019 e, igualmente, el rubro estimado excede los límites indemnizatorios aplicables al caso de marras.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse en primera medida que la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por otro lado, respecto a la acreditación de la cuantía de la supuesta pérdida no se encuentra probada, como quiera que el lucro cesante y daño moral son claramente improcedentes y exorbitantes en este caso, teniendo en cuenta que no existe prueba que acredite las tipologías de daño deprecadas en la demanda con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 27 de noviembre de 2019. Del incumplimiento de las cargas que imperativamente establece el artículo 1077 del Código del Comercio por la parte Demandante, basta con remitirnos a las pruebas aportadas con la demanda, en donde se evidencia la carencia de elementos demostrativos que acrediten la realización del riesgo asegurado y la supuesta pérdida. Por tanto, es claro que no se cumplen las cargas del artículo 1077 del Código de Comercio por lo que deberán negarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

# CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro.En ese sentido, de llegarse a pagar los perjuicios solicitados en el libelo de demanda se estaría contraviniendo el carácter meramente indemnizatorio pues (i) no se configuraron los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, (ii) no se acreditaron los presupuestos para el reconocimiento y pago del lucro cesante y (iii) la suma pretendida por el daño moral es exorbitante.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) **Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio.** La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (…)”[[9]](#footnote-9) (Negrita y subraya por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por conceptos de: perjuicios morales y el lucro cesante, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte Cartón de Colombia S.A., implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte de una compañía que nada tuvo que ver con el hecho acaecido, cuando fue la víctima quien se expuso de manera imprudente a la ocurrencia del hecho.

Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado que: (i) No es procedente el reconocimiento de perjuicios morales, por cuanto no se han estructurado los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que en este proceso se pretende endilgar, no obstante, en el evento de endilgarse algún tipo de responsabilidad, será necesaria la valoración específica de los hechos y pruebas contenidas en este expediente para tasar lo relacionado a esta modalidad de perjuicio, teniendo en cuenta que los valores solicitados como indemnización por concepto de perjuicios morales, exceden los valores tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos en casos de fallecimientos y en cualquier caso, la indemnización por un daño ocurrido no debe nunca enriquecer a los demandantes, toda vez que el daño a indemnizar debe corresponderse exactamente con la magnitud de este.

Tampoco frente al lucro cesante, comoquiera que la parte demandante no acredita de forma suficiente en primer lugar, la relación laboral como sustento de los ingresos percibidos por la víctima directa en tanto la certificación laboral aportada proviene de un tercero cuya ratificación se requiere para determinar su eficacia probatoria y en segundo lugar, la dependencia económica alegada por la parte demandante no se encuentra acredita bajo ningún medio probatorio si quiera sumario, de tal suerte que no se prueba la frustración económica susceptible de ser indemnizada.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad civil extracontractual de los demandados y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

# EN TODO CASO, NO SE PODRÁ SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS ASEGURADOS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 040005642907

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto se estableció un límite de mil seiscientos cuarenta millones de pesos ($1.640.000.000), los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

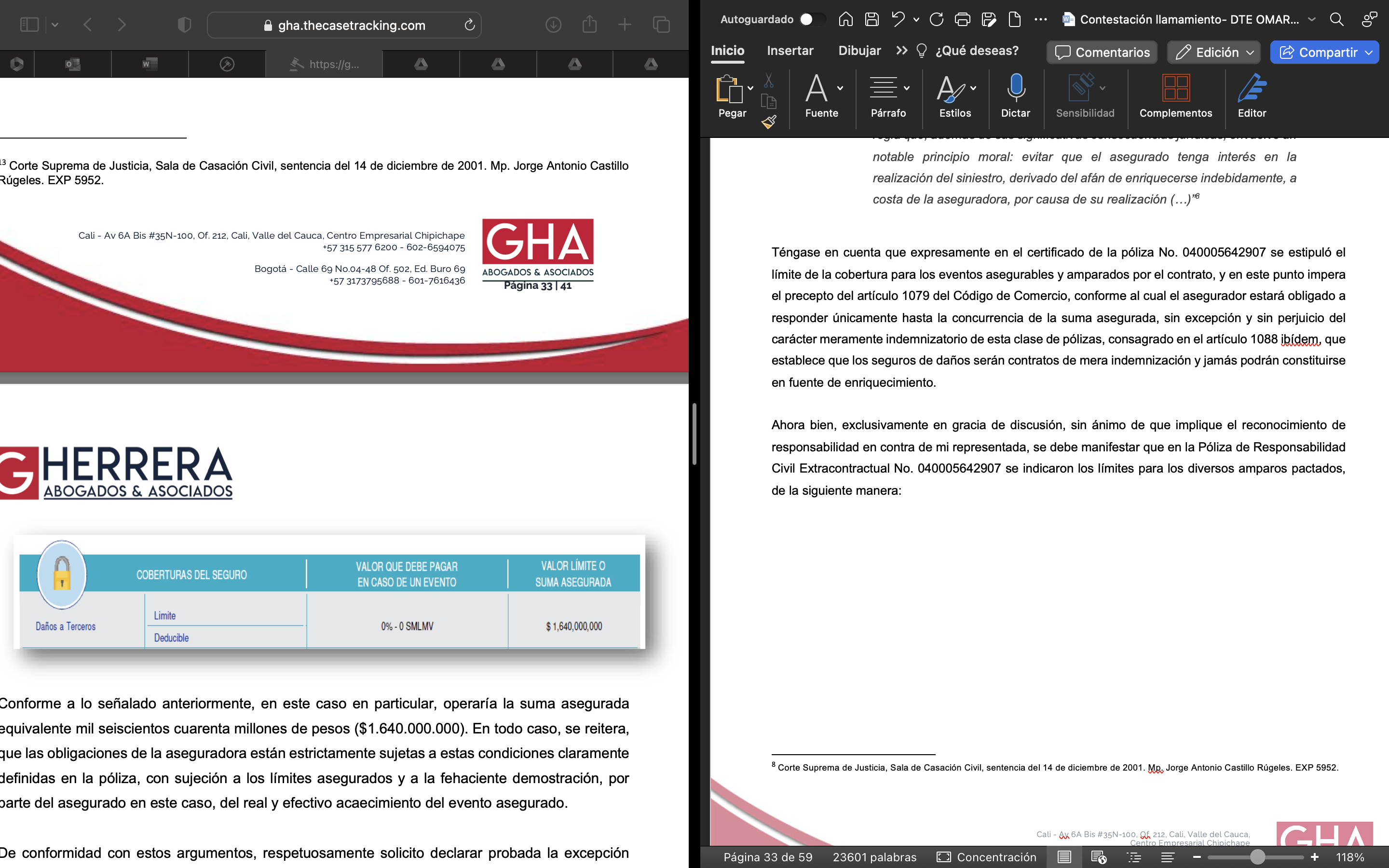
“(…) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)”[[10]](#footnote-10)

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 040005642907 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 040005642907 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

Conforme a lo señalado anteriormente, en este caso en particular, operaría la suma asegurada equivalente mil seiscientos cuarenta millones de pesos ($1.640.000.000). En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción denominada “Límites máximos de responsabilidad del asegurador y condiciones de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 040005642907 los cuales enmarcan las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

# DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada. Solicito respetuosamente al juez, declarar probada esta excepción.

# EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 040005642907

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al Asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la póliza. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(…) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…)”.

En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura.

En consecuencia, de hallarse configurada, según el acervo probatorio que obra dentro del proceso, además de las alegadas, alguna otra causal de exclusión consignada en las condiciones generales o particulares de la póliza no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese sentido, ruego al Despacho que, una vez advertida la causal, se le dé aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses de mi prohijada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

# INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE MI MANDANTE Y LAS DEMÁS DEMANDADAS

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato. Por lo que el Despacho deberá tener en consideración que no se podrá imponer a mi prohijada ninguna obligación derivada de una solidaridad que no existe o que no puede predicarse en contra de la Aseguradora que represento.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige, es por ello pertinente resaltar que mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC780-2020, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria, pues ante lo manifestado, la sentencia antes descrita, se pronunció, exponiendo lo siguiente:

“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume**. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica**. Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material.** Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla por fuera del texto original)

Por lo anterior, es necesario exponer que mi representada, no puede ser tenida como responsable de los hechos objeto del presente litigio, ni está en la obligación de indemnizar los presuntos perjuicios ocasionados en el accidente de tránsito, pues que todo ello está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado, con sujeción a las condiciones de cada póliza; en virtud de ello, es válido afirmar desde ya que, de conformidad con la exposición previa, no le asiste a mi representada en todo caso la obligación de hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual vinculada en esta contienda, toda vez que el acaecimiento del riesgo asegurado y otorgado en la misma, no se ha demostrado.

Respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

# PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

Propongo la presente excepción para que sea reconocidos los efectos jurídicos de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, en el evento de demostrarse durante el trámite procesal, que desde la fecha del accidente- 27 de noviembre de 2019- transcurrieron más de dos años, siendo este último el término de prescripción consagrado en el Estatuto Comercial.

En lo que respecta a la prescripción, se tiene que es un fenómeno jurídico a través del cual se pueden adquirir derechos o extinguir obligaciones, en efecto, el artículo 2512 del Código Civil establece lo siguiente:

“(…) Artículo 2512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción (…)”

Por su parte, el artículo 2535 Ibídem, que contempla la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales y dispone: *“(…) Artículo 2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos exige solamente cierto lapso de tiempo durante la cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible (…)”.*

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, si no también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

"(…) Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (…)".

Por lo anterior, el término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro en su modalidad ordinaria, inicia a correr, desde el momento en que este tuvo conocimiento del hecho y que para el caso. En este orden de ideas, si llegara a acreditarse el conocimiento de la existencia de la póliza con anterioridad a la audiencia de conciliación por parte de los demandantes, deberá tenerse en cuenta tal circunstancia para el cómputo de términos y declarar la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro si así se prueba.

# GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso, ya sea frente a la demanda o ante el llamamiento en garantía, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código del Comercio.

## CAPÍTULO II

## CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

**Frente al hecho “1”:** Es cierto, conforme se ha acreditado en el proceso en el que también ha sido vinculada, mediante acción directa, mi representada Seguros Generales Suramericana S.A.

**Frente al hecho “2”:** Es cierto, y se precisa que entre la sociedad Cartón de Colombia S.A. y mi poderdante, se suscribió un contrato de seguro contenido en la póliza de Seguro de Autos – Plan Utilitarios y Pesados- No. 040005642907, la cual ampara la responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción del vehículo de placa TZP-161, con vigencia desde el día 01 de diciembre de 2018, hasta el 01 de diciembre de 2019, amparo que cuenta con una suma asegurada igual a $1.640.000.000; pese a lo anterior, se debe indicar que la mera existencia del contrato de seguro, no se traduce en la generación automática de una obligación a cargo de mi representada.

Corolario a lo previamente destacado, es menester resaltar que, el surgimiento de cualquier obligación en el asunto se encuentra condicionada a que se pruebe: (i) la estructuración de la responsabilidad civil que se pretende atribuir en cabeza de la parte demandada; (ii) que los hechos hubieren ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, y; (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.

**Frente al hecho “3”:** No es un hecho sino una consideración del apoderado que en todo caso debe precisarse que los hechos derivados del accidente del 27 de noviembre de 2019 no comportan un siniestro en sí mimo, comoquiera que el extremo activo no acreditó bajo ningún medio probatorio la materialización del riesgo asegurado en los términos del Art. 1077 del C. Co. Contrario a ello se encuentra acreditado el hecho exclusivo de la víctima, lo cual se probó con el IPAT y con el dictamen pericial elaborado por IRSL VIAL, allegados oportunamente al expediente.

Ahora bien, si bien es cierto que la sociedad Cartón de Colombia S.A. está facultada para llamar en garantía a mi prohijada con ocasión al contrato de seguro contenido en la póliza No. 040004542907, se itera que Seguros Generales Suramericana S.A. no está obligada a reconocer y pagar monto indemnizatorio alguno puesto que no se encuentra acreditaao la materialización del riesgo, es decir, la responsabilidad extracontractual endilgada por la conducción del vehículo de placas TZP-161.

1. **PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**ME OPONGO** a cualquier condena que se pretenda imponer a mi representada en virtud del contrato de seguro, en la medida en que no se ha acreditado la realización del riesgo asegurado, como lo es la responsabilidad civil extracontractual del conductor del vehículo de placas TZP-161, por ende, mientras no se acredite la condición de la que pende la obligación indemnizaroria de mi representada no es procedente que se le imponga condena alguna.

1. **EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

# INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NO. 040005642907

Se propone el presente medio exceptivo a fin de demostrarle al Despacho que en cabeza de mi representada no ha surgido obligación indemnizatoria alguna derivada de los hechos acontecidos el 27 de noviembre de 2019 debido a que no se ha materializado el riesgo, esto es, no existe un evento que permita endilgar responsabilidad civil extracontractual al conductor del vehículo de placas TZP-161, toda vez que en el caso de marras se configuró la causal eximente por el hecho de la víctima y, en ese sentido, no se realizó el riesgo amparado en el contrato de seguro contenido en la Póliza 040005642907, entonces, ante ese panorama no es posible imponer obligación alguna a cargo de la compañía aseguradora.

La determinación del siniestro, tal como se contempla en el artículo 1072 del Código de Comercio corresponde a la realización del riesgo asegurado, concepto que a su vez es definido por el artículo 1054 del mismo estatuto como el suceso incierto que no depende de la voluntad del tomador, ni del asegurado y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Es decir, el siniestro como hecho que detona la exigibilidad de la obligación indemnizatoria de una aseguradora, es la realización del riesgo asegurado, el cual produce daños o perjuicios y cuya reparación estaría garantizada por el contrato de seguro.

En otras palabras, aunque se produzca una pérdida para el asegurado o el beneficiario, no se considerará siniestro a menos que dicho hecho se encuentre amparado y cuando ocurra tal y como se previó en el contrato de seguro, o cuando habiendo ocurrido, en su producción convergen circunstancias que se previeron como exclusiones. Dicho lo anterior, se tiene que no existe obligación indemnizatoria a cargo de mi representada, toda vez que no se realizó el riesgo asegurado en la Póliza No. 040005642907, por cuanto en el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que el extremo activo pretende endilgar. Lo anterior se puede concluir conforme a lo consignado en el IPAT y el dictamen pericial elaborado por el IRSL VIAL, en donde quedó reflejado con transparencia que la conducta de la señora Fabiola Velasco como conductora del vehículo Nro. 2 (motocicleta), fue la única conducta catalogada como la causa eficiente del daño.

En este sentido, se encuentra probado en primer lugar, que no existe nexo causal entre el daño alegado y la conducta del asegurado, además se configuró la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que fue la motociclista quien se expuso a la ocurrencia del daño, de tal suerte que no se acreditaron los elementos necesarios para imputar responsabilidad al conductor del vehículo asegurado ni a Cartón de Colombia S.A.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1072 del Código de Comercio, estableció:

“(…) ARTÍCULO 1072. <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado (…)”

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el temavf:

“(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo- como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”

**(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual, si fuera poco emerge pura y simple(…)**

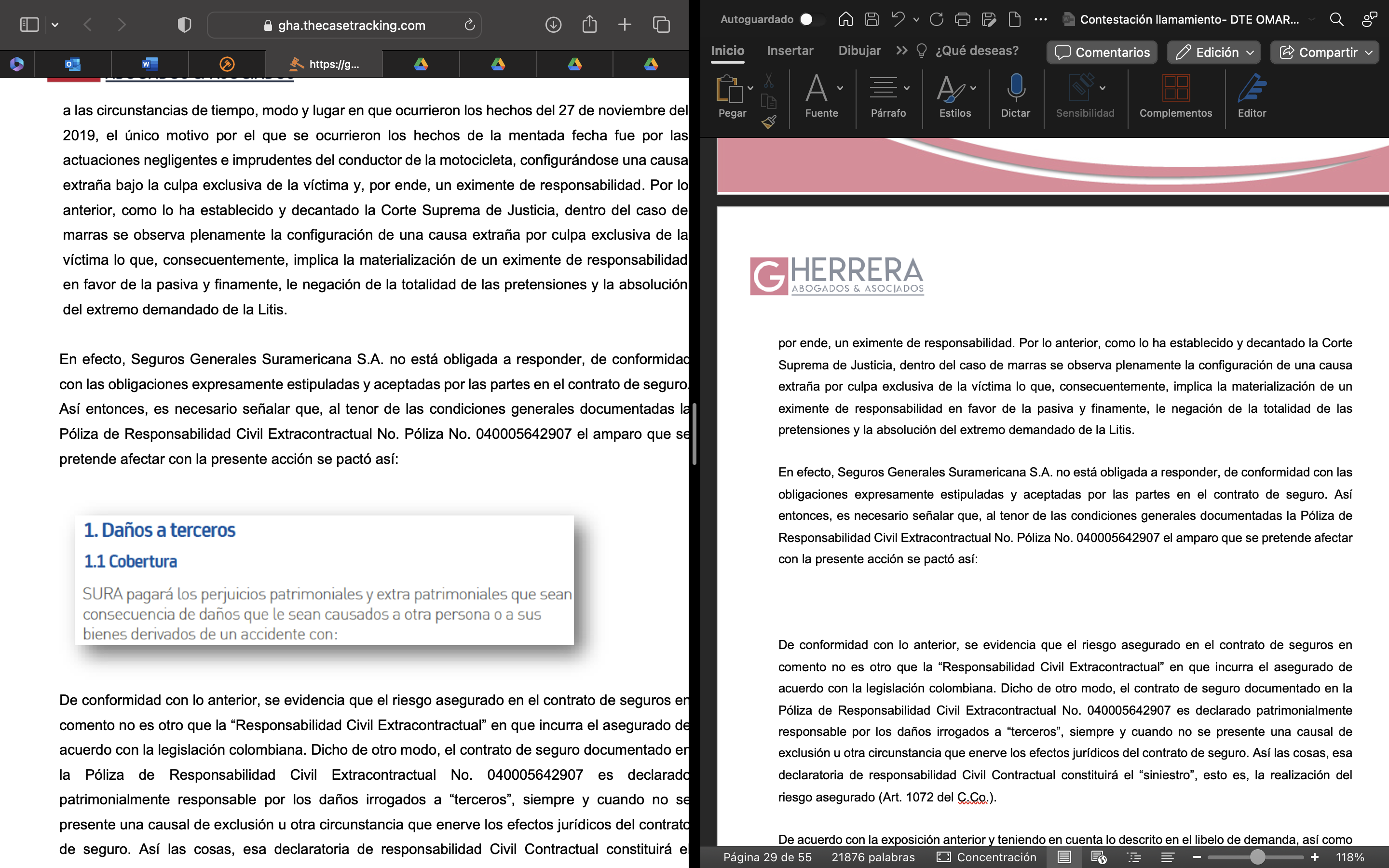
Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida**. (…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”

“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero, aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”[[11]](#footnote-11) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Sin perjuicio de las excepciones de la contestación de la demanda, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza No. 040005642907, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Se aclara que, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza. Sin embargo, en este caso encontramos que tal responsabilidad no se estructuró, pues de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de noviembre del 2019, la única causa eficiente del accidente se deriva de las actuaciones negligentes e imprudentes de la conductora de la motocicleta, configurándose una causa extraña bajo la culpa exclusiva de la víctima y, por ende, un eximente de responsabilidad. Por lo anterior, como lo ha establecido y decantado la Corte Suprema de Justicia, dentro del caso de marras se observa plenamente la configuración de una causa extraña por culpa exclusiva de la víctima lo que, consecuentemente, implica la materialización de un eximente de responsabilidad en favor de la pasiva y finamente, le negación de la totalidad de las pretensiones y la absolución del extremo demandado de la Litis.

En efecto, Seguros Generales Suramericana S.A. no está obligada a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Así entonces, es necesario señalar que, al tenor de las condiciones generales documentadas la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. Póliza No. 040005642907 el amparo que se pretende afectar con la presente acción se pactó así:



De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “Responsabilidad Civil Extracontractual” en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 040005642907 cubre cuando el asegurado es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “terceros”, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil Contractual constituirá el “siniestro”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del C.Co.) situación que no podrá ocurrir en virtud del eximente de responsabilidad ya reseñado.

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el libelo de demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que fue la conducta de la víctima directa la causa determinante del resultado fatal, en tanto condujo su vehículo sin la destreza que ello requiere en tanto no contaba con licencia de conducción lo que permite concluir su falta de pericia, e inobservo los deberes que como actor vial le asistían al adelantar al vehículo Nro. 1 por el extremo derecho del carril, situación que suponía un riesgo para su integridad. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 040005642907 que sirvió como sustento para demandar de forma directa mi representada, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la aseguradora. Solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

# CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGURO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. En ese sentido, de llegarse a pagar los perjuicios solicitados en el libelo de demanda se estaría contraviniendo el carácter meramente indemnizatorio pues (i) no se configuraron los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, (ii) no se acreditaron los presupuestos para el reconocimiento y pago del lucro cesante y (iii) la suma pretendida por el daño moral es exorbitante.

Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

“(…) **Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio.** La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (…)”[[12]](#footnote-12) (Negrita y subraya por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por conceptos de: perjuicios morales y el lucro cesante, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte Cartón de Colombia S.A., implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte demandante recibiendo una indemnización por parte de una compañía que nada tuvo que ver con el hecho acaecido, cuando fue la víctima quien se expuso de manera imprudente a la ocurrencia del hecho.

Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado que: (i) No es procedente el reconocimiento de perjuicios morales, por cuanto no se han estructurado los elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que en este proceso se pretende endilgar, no obstante, en el evento de endilgarse algún tipo de responsabilidad, será necesaria la valoración específica de los hechos y pruebas contenidas en este expediente para tasar lo relacionado a esta modalidad de perjuicio, teniendo en cuenta que los valores solicitados como indemnización por concepto de perjuicios morales, exceden los valores tasados y adjudicados por la Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos en casos de fallecimientos y en cualquier caso, la indemnización por un daño ocurrido no debe nunca enriquecer a los demandantes, toda vez que el daño a indemnizar debe corresponderse exactamente con la magnitud de este.

Tampoco frente al lucro cesante, comoquiera que la parte demandante no acredita de forma suficiente en primer lugar, la relación laboral como sustento de los ingresos percibidos por la víctima directa en tanto la certificación laboral aportada proviene de un tercero cuya ratificación se requiere para determinar su eficacia probatoria y en segundo lugar, la dependencia económica alegada por la parte demandante no se encuentra acredita bajo ningún medio probatorio si quiera sumario, de tal suerte que no se prueba la frustración económica susceptible de ser indemnizada. Anudado a lo anterior, es incorrecta la fórmula utilizada por el apoderado de la activa pues realiza la liquidación del lucro cesante con base en el IBL de un salario mínimo para cada uno de los demandantes, desconociendo que el IBL debe dividirlo en el número de reclamantes y no tomar el salario completo para calcular el lucro cesante de cada uno.

Conforme a ello, dado que los perjuicios solicitados en el petitum de la demanda presentan serias inconsistencias, reconocer el pago de suma alguna con cargo a la póliza de seguro, implicaría correlativamente transgredir el carácter meramente indemnizatorio que revisten los contratos de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad civil extracontractual de los demandados y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

En conclusión, no puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción, y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

1. EN TODO CASO, NO SE PODRÁ SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS ASEGURADOS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 040005642907**.**

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto se estableció un límite de mil seiscientos cuarenta millones de pesos ($1.640.000.000), los cuales se encuentran sujetos a la disponibilidad de la suma asegurada. La ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza va agotando la suma asegurada, por lo que es indispensable que se tenga en cuenta la misma en el remoto evento de proferir sentencia condenatoria en contra de nuestro asegurado.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

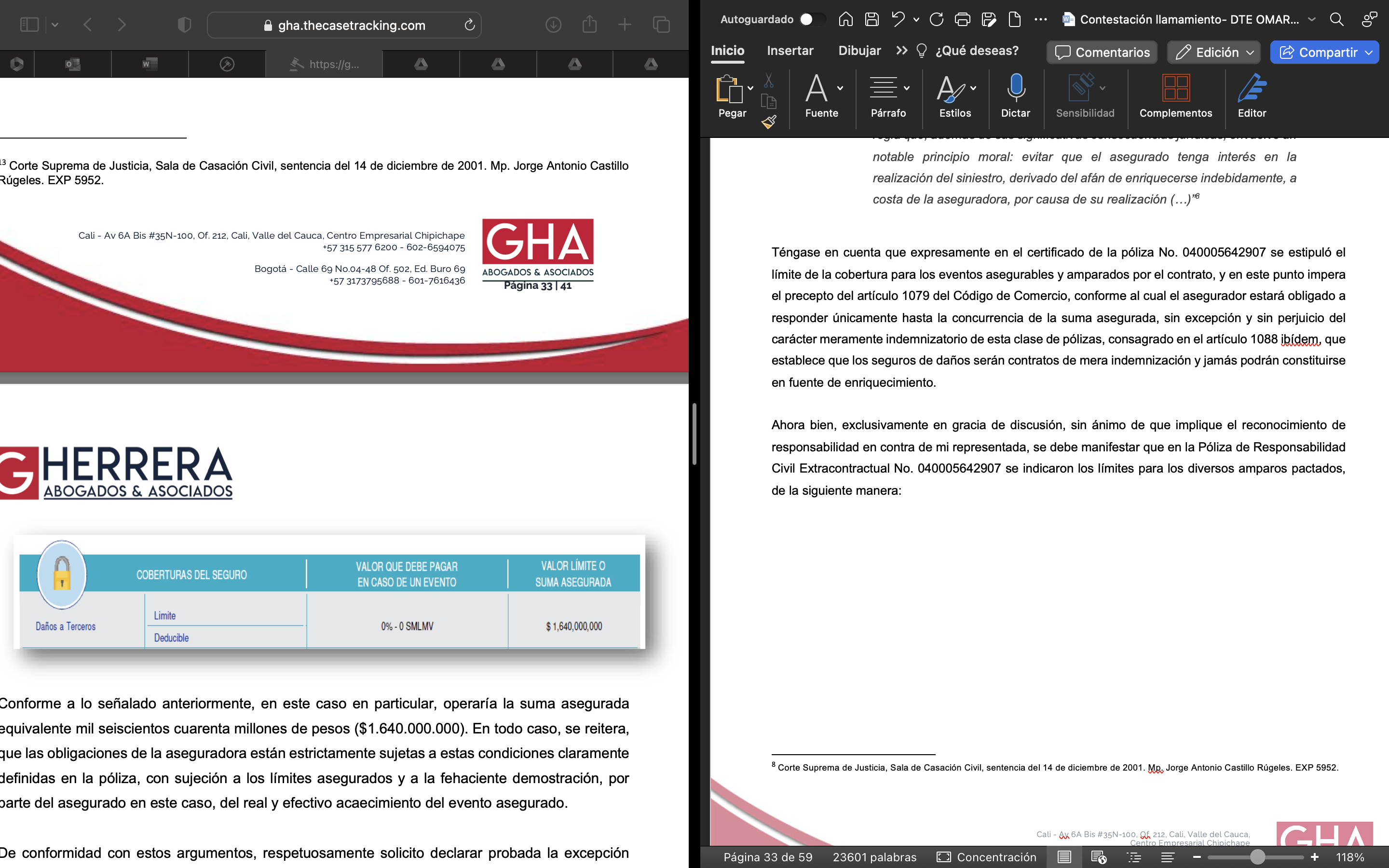
“(…) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)”[[13]](#footnote-13)

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza No. 040005642907 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 040005642907 se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

Conforme a lo señalado anteriormente, en este caso en particular, operaría la suma asegurada equivalente mil seiscientos cuarenta millones de pesos ($1.640.000.000). En todo caso, se reitera, que las obligaciones de la aseguradora están estrictamente sujetas a estas condiciones claramente definidas en la póliza, con sujeción a los límites asegurados y a la fehaciente demostración, por parte del asegurado en este caso, del real y efectivo acaecimiento del evento asegurado.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción denominada “Límites máximos de responsabilidad del asegurador y condiciones de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 040005642907 los cuales enmarcan las obligaciones de las partes, planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

# DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Sin que con el planteamiento de esta excepción se esté aceptando responsabilidad alguna por parte de mi representada, es pertinente manifestar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado de una póliza se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos, dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que, si para la fecha de la sentencia y ante una condena, se ha agotado totalmente el valor asegurado, no habrá lugar a obligación indemnizatoria por parte de mi prohijada. Solicito respetuosamente al juez, declarar probada esta excepción.

# EXCLUSIONES DE AMPARO CONCERTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 040005642907

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que no se amparan dentro del contrato de seguro, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al Asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la póliza. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(…) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…)”.

En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura.

En consecuencia, de hallarse configurada, según el acervo probatorio que obra dentro del proceso, además de las alegadas, alguna otra causal de exclusión consignada en las condiciones generales o particulares de la póliza no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese sentido, ruego al Despacho que, una vez advertida la causal, se le dé aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses de mi prohijada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

# PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

Propongo la presente excepción para que sea reconocidos los efectos jurídicos de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, en el evento de demostrarse durante el trámite procesal, el conocimiento de los hechos por parte del asegurado, previo a la solicitud de conciliación que se hiciera.

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, si no también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

"(…) Art. 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes (…)".

Ahora bien, en tratándose de la prescripción en el seguro de responsabilidad el Estatuto Comercial indica *“(…) En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima.* ***Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial*** *(…)”* (Subraya y negrilla fuera de texto)

En vista de lo anterior, riego al señor declarar probada la prescripción conforme lo indican los artículos 1081 y 1131 si en el curso del proceso se prueba que antes de la demanda existió reclamación de los hoy demandantes a cartón de Colombia y que desde esa calenda hasta la radicación del llamamiento transcurrió mas de dos años.

# GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, en atención a lo reglado por el artículo 282 del Código General del Proceso, ya sea frente a la demanda o ante el llamamiento en garantía, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código del Comercio.

## CAPÍTULO IV:

## PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

1. **Ratificación de documentos provenientes de terceros:**

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: *“(…) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”.*

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

1. Certificación laboral expedida por Echeverry Pérez Ltda., suscrita por Melba Agredo como directora de Talento Humano. Con dirección física Carrera 2 4 45 Interior A, Popayán, Cauca y correo electrónico info@echeverryperez.com. Solicitando al despacho se ordene su comparecencia y citación a cargo del apoderado de la parte demandante.
2. Acta de Declaración Extra juicio bajo juramento rendida por el señor LUIS EDUARDO RAMOS GOMEZ con cedula de ciudadanía Nro. 76.304.362, teléfono 3116256567 Solicitando al despacho se ordene su comparecencia y citación a cargo del apoderado de la parte demandante.
3. **Frente a las declaraciones extrajuicio allegadas por el extremo activo**

En vista que la parte activa del proceso pretende hacerse valer de declaraciones extrajuicio, comedidamente solicito Señor Juez, al tenor de los artículos 188 y 222 del Código General del Proceso, ordenar la comparecencia de los testigos que se referencian a continuación con el fin ejercer la ratificación de las declaraciones:

1. Sírvase, Señor Juez, de ordenar ordenar la comparecencia y citación a cargo del apoderado de la parte demandante del señor JULIÁN BOLÍVAR GRILLO, quien testificó vía audio aportado en el descorre del traslado de las excepciones presentado por los demandantes.
2. En caso de no accederse a la ratificación de documentos enunciada en en precedencia, solicito, señor Juez, ordenar la comparecencia y citación a cargo del apoderado de la parte demandante del señor LUIS EDUARDO RAMOS GOMEZ con cédula de ciudadanía Nro. 76.304.362 y teléfono 3116256567.
3. **Frente al dictamen pericial solicitado en el libelo introductorio**

El Solicitante en su escrito de demanda exige el decreto de la prueba pericial para determinar i) el valor del daño emergente y lucro cesante, ii) el monto de los perjuicios causados a los demandantes y iii) los demás puntos que se soliciten en el momento de la diligencia. Sin embargo, en su solicitud no se cumplen los requisitos ni las ritualidades mínimas exigidas por mandato de la Ley, para que pueda este Honorable Despacho decretarla. En otras palabras, la Ley Procesal aplicable a la materia establece unos requisitos que deben cumplirse estrictamente durante la petición de una prueba, so pena que el Juzgador se vea en la obligación de negar el decreto y por ende práctica de la misma.

El Código General del Proceso en su artículo 227 fija los requisitos mínimos que debe cumplir una parte procesal para solicitar el decreto de una pericia. Esta norma señala:

“(…) ARTÍCULO 227. DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. **La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas.** Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.

El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado (…)”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Esta norma imperativa de derecho público señala que cuando se requiera el decreto de una pericia, debe el solicitante aportarla junto con los anexos de su demanda. Ahora bien, al contrastar este requisito con lo escrito por los demandantes, se evidencia que se está solicitando la designación de un perito, cuando la prueba debió haberse aportado conjuntamente con la demanda. En otras palabras, la parte actora no solo no cumple con los requisitos mínimos para el decreto de una prueba pericial, esto es, el hecho de aportar el dictamen junto con su escrito de demanda, sino que también, busca esquivar u omitir la carga que recae sobre sus hombros, y que debió cumplir en su oportunidad, máxime cuando pretendió hacerse valer del amparo de pobreza, el cual fue negado por el Despacho en el Auto No. 00686 de 01 de agosto de 2023.

Adicionalmente, se debe recapitular lo expuesto por la Corte Constitucional en su sentencia T-504 de 1998, en donde expuso sin lugar a dudas que cuando una solicitud probatoria no cumple con los requisitos mínimos para su decreto, el juez en calidad de director del proceso, deberá abstenerse de decretar la misma. El tenor literal de dicha sentencia establece lo siguiente:

“(…) **En el modo de pedir, ordenar y practicar las pruebas se exigen ciertos requisitos consagrados en el Código de Procedimiento Civil que constituyen una ordenación legal, una ritualidad de orden público, lo que significa que son reglas imperativas y no supletivas, es decir, son de derecho estricto y de obligatorio acatamiento por el juez y las partes.** Por otra parte, el juez como director del proceso, debe garantizar, en aras del derecho de defensa de las partes, los principios generales de la contradicción y publicidad de la prueba, y en este sentido, debe sujetarse a las exigencias consagradas en el procedimiento para cada una de las pruebas que se pidan (…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)”.

Por otra parte, el artículo 234 del Código General del Proceso dispone:

“(…) Los jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte los servicios de entidades y dependencias oficiales para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aquellas. Con tal fin las decretará y ordenará librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen (…)”.

En ese sentido, resulta claro que al dictamen solicitado por la parte demandante no le son aplicables la norma antes referida, como quiera que no se trata de unos dictámenes periciales de una entidad oficial. Más aún, cuando los dictámenes se están solicitando a otro ente privado. Por lo que es claro que la petición de los dictámenes periciales de la parte demandante ataca la naturaleza del dictamen previsto en el artículo 234 del C.G.P., pues éste no se circunscribe a aquellos que solo pueden practicar las entidades oficiales. Por lo que la solicitud es improcedente.

En conclusión, teniendo en cuenta que la solicitud por la parte demandante no cumple con los requisitos mínimos y exigidos por la Ley Procesal para habilitar el decreto de la misma, comedidamente solicito al Honorable Despacho, que niegue el decreto y, por ende, la práctica de la pericia.

1. **Contradicción del dictamen pericial aportado en el libelo de demanda**

Por medio del presente comedidamente solicito al Despacho citar al perito Nixon Adalberto Ortiz Marín, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.399.965 de Pasto, con teléfono 310494941 y dirección electrónica [investigaciondeaccidentedetransito@hotmail.com](mailto:investigaciondeaccidentedetransito@hotmail.com) a fin de ejercer la contradicción de la pericia allegada, de conformidad con el artículo 228 del Código General del Proceso que faculta a las partes a solicitar la comparecencia del perito a la audiencia para formular el respectivo interrogatorio:

**“(…) Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia**, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes (…)” (Subraya y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, es procedente la solicitud de comparecencia del señor Nixon Adalberto Ortiz Marín, con el fin de que sustente y declare sobre la pericia allegada al plenario y, en ese sentido, ruego al Despacho ordenar la respectiva citación.

**CAPÍTULO V:**

## MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR HDI SEGUROS S.A.

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

## DOCUMENTALES

1. Póliza de Seguro de Autos No. 040005642907, la cual ya reposa en el expediente por haber sido radicada con la contestación a la demanda.
2. Condicionado general No. F-01-40-207 aplicable a la Póliza de Póliza de Seguro de Autos No. 040005642907.

## INTERROGATORIO DE PARTE

* Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte de los señores OMAR POAMANGA, NATALIA POAMANGA VELASCO, CHRIS TATIANA YASNO VELASCO, CAROLINA POAMANGA VELASCO, OMAR FRANCISCO POAMANGA VELASCO y TULIA CRISTINA MALO TRUJILLO en su calidad de demandantes, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
* Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor HUGO HERNANDO VALASCO OLAVE y al señor RUDOLF ALEXANDER RAHN ZUÑIGA- representante legal de Cartón de Colombia S.A. o quien haga sus veces-, en su calidad de demandados, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados en cuestión podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la contestación de la demanda

## DECLARACIÓN DE PARTE.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de Seguros Generales Suramericana S.A. para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza de Seguro de Autos – Plan Utilitarios y Pesados- No. 040005642907.

## TESTIMONIALES.

* Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán y puede ser citada en la Carrera 32 bis No. 4 16 Popayán y correo electrónico [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com) para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza No. 040005642907, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.
* Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio del señor **SANIN JESUS DAZA IMBACHI**, C.C. No. 10316144 y placas 093458 quien fue el agente de tránsito que realizó el Informe de Accidente de Tránsito Nro. A001044240. Esta persona podrá ser notificada en las dependencias de la Seccional de Tránsito y Transporte Metropolitana de Popayán, ubicada en la Carrera 2, calle 25 Norte, Pomona vía al Huila, teléfono 3115540984, correo electrónico: secretariatransito@popayan.gov.co cuyo objeto de prueba del testimonio será declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de noviembre de 2019 y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial.

## INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al H Juez, proceder de conformidad.

## ANEXOS

* Documentos referidos en el acápite de pruebas, los cuales ya reposan en el expediente por haber sido radicado con la contestación a la demanda inicial.
* Certificado de existencia y representación legal de Seguros Generales Suramericana S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, el cual ya reposa en el expediente por haber sido radicado con la contestación a la demanda inicial.
* Certificado de Existencia y Representación legal de Seguros Generales Suramericana S.A.. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual ya reposa en el expediente por haber sido radicado con la contestación a la demanda inicial.

## NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados, donde indicaron en sus respectivas contestaciones.

Mi representada Seguros Generales Suramericana S.A., recibirá notificaciones en la Carrera 63 #49ª-31 piso1 edificio Camacol en la ciudad de Medellín, correo electrónico [notificacionesjudiciales@suramericana.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co).

El suscrito en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Email: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

1. Patino, Héctor: Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. 24 de febrero de 2011. Universidad Externado de Colombia [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01. junio 12 de 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 07/03/2019. MP Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-5)
6. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501 [↑](#footnote-ref-8)
9. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-10)
11. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-11)
12. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-13)